

IV

Conferencia de clausura

LA DISCIPLINA PENITENCIAL EN EL NUEVO CODIGO DE DERECHO CANONICO

CARMELO DE DIEGO-LORA

I. INTRODUCCIÓN

Veinticinco cánones —del 959 al 983— le dedica el Código de Derecho Canónico, promulgado el 25 de Enero de 1983, al Sacramento de la Penitencia. En cambio, el Código de 1917 destinaba a su regulación 41 de sus cánones, si bien siete de éstos contenían normas referidas exclusivamente a la reservación de los pecados, materia jurídica hoy desaparecida en el nuevo *Codex*.

También la nueva sistemática del reciente Código hace que los Sacramentos sean tratados bajo una nueva rúbrica de un libro, el IV, designado *De Ecclesiae munere sanctificandi*, perdiéndose ya en la historia aquella vieja rúbrica *De rebus*, del antiguo Libro III, en la que se contenían regulaciones sobre materias tan dispares como son las de los Sacramentos cuando se las compara, por ejemplo, con las de administración y disposición de los bienes temporales de la Iglesia. Podemos decir, por consiguiente, y a manera de introducción, que la disciplina de los Sacramentos en el nuevo Código ha encontrado un lugar más apropiado en su sistemática. Y en cuanto a la del Sacramento de la Penitencia, se ha simplificado su ordenación, se ha corregido una excesiva carga jurídicista que poseía, se han destacado ciertos aspectos teológicos que convenía hacer resaltar, se ha procurado acoger en estas nuevas normas la antigua e inmutable doctrina de Trento a la vez que se atienden otros aspectos nuevos, sobre los que el Concilio Vaticano II llamó la atención en su día.

En efecto, la Constitución dogmática *Lumen gentium* había enseñado que «quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen el perdón de la ofensa que han hecho a Dios, por su misericordia, y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que han herido con

su pecado, la cual contribuye a su conversión con el amor, el ejemplo y las oraciones»¹. Estos dos aspectos, frutos del Sacramento de la Penitencia —la obtención del perdón de Dios por los pecados cometidos después del Bautismo, y la reconciliación con la Iglesia, a la que hirieron al pecar—, son fielmente recogidas por el c. 959, con el que se comienza el Título IV, De la Penitencia, de la *Pars Prima*, dedicada a los Sacramentos, de este Libro IV del Código nuevo. Siguiendo la misma enseñanza, el Decreto conciliar *Presbyterorum Ordinis* al describir que los Presbíteros han sido consagrados por Dios, mediante el ministerio del Obispo, haciéndolos «partícipes de modo especial del sacerdocio de Cristo», y actúan «en las celebraciones sagradas como ministros de Aquel que en nuestro favor ejerce constantemente en la Liturgia su función sacerdotal por medio de su Espíritu», hacía notar cómo los Presbíteros, «por el Sacramento de la Penitencia, reconcilian a los pecadores con Dios y con la Iglesia»².

La Iglesia, constituida por Jesús autor de la salvación en sacramento visible de esta unidad salvadora³, se sirve de los Obispos, sucesores de los Apóstoles, para que permanezca el oficio de los Apóstolos de apacentar la Iglesia, perpetuamente ejercido por el orden sagrado de los Obispos, como permanece de igual modo el Oficio concedido por el Señor, singularmente a Pedro, el primero de los Apóstoles⁴. Los Presbíteros son ayuda e instrumento del Obispo, son los «prudentes colaboradores del orden Episcopal», y si bien «forman con su Obispo un presbiterio único» y «santifican y gobiernan, bajo la autoridad del Obispo, la porción de la grey del Señor que les ha correspondido, hacen visible la Iglesia universal donde están y contribuyen con eficacia a edificar el Cuerpo entero de Cristo (cfr. Eph. 4,12)», y «deben poner empeño en cooperar al quehacer pastoral en toda la diócesis e incluso en toda la Iglesia»⁵.

Esta dimensión católica, universal, del sacerdocio en la Iglesia, se precisó de modo muy notable en el Decreto *Christus Dominus* para los Obispos, cuando los muestra, en cuanto «legítimos sucesores de los Apóstoles y miembros del Colegio Episcopal», que «deben saber-

1. Constitución Dogmática *Lumen Gentium*, n. 11. En adelante se citará con las siglas LG.

2. Cfr. Decreto Conciliar *Presbyterorum Ordinis*, n. 5. En adelante se citará con las siglas PO.

3. Cfr. LG, n. 9.

4. Cfr. LG, n. 20.

5. Cfr. LG, n. 28.

se siempre unidos entre sí y mostrarse solícitos por todas las Iglesias, ya que por institución de Dios y por obligación del Oficio apostólico, cada uno es responsable de la Iglesia juntamente con los demás Obispos»⁶. Mas también este mismo Decreto, al referirse a los presbíteros como «próvidos colaboradores del Obispo», participando y ejerciendo «el único sacerdocio de Cristo», «aunque incardinados o adscritos a una Iglesia particular»⁷, pueden también los sacerdotes quedar adscritos, sin embargo, «a labores supradiocesanas», en las que, al desarrollar un admirable trabajo apostólico, deben ser objeto de especial solicitud, «sobre todo del Obispo en cuya diócesis viven»⁸. «El sacerdocio de Cristo —declara coherentemente el Concilio Vaticano II—, del que los Presbíteros son verdaderos partícipes, se dirige necesariamente a todos los pueblos y a todos los tiempos sin limitación ninguna de sangre, de nación o de tiempo, como ya se significaba de modo misterioso en la figura del Melquisedec. Recuerden los Presbíteros que para ellos debe ser entrañable la solicitud de todas las Iglesias»⁹.

Esta doctrina tiene una serie de consecuencias prácticas que el mismo Decreto conciliar indica seguidamente, y que no es ahora la ocasión de entrar en ello. Pero, al objeto que aquí nos interesa, trasciende de modo decisivo al c. 967 § 2, cuando dispone una novísima disciplina: «Quienes tienen facultad de oír confesiones tanto por razón de oficio como por concesión del Ordinario del lugar de incardinación o del lugar en que tienen su domicilio, pueden ejercer la misma facultad en cualquier parte», al menos que el Ordinario de algún lugar se oponga en un caso concreto.

La oportunidad del tema de este Simposio, sobre «Reconciliación y Penitencia», es evidente ante el próximo Sínodo a celebrar en Roma; pero aumentó el acierto del tema elgido cuando el Romano Pontífice Juan Pablo II, en 6 de Enero de 1983, convocó especialmente a todos los files a que se sientan llamados, «en primer lugar, a un compromiso de penitencia y renovación, porque tal es el estado permanente de la Iglesia misma»; al mismo tiempo, para lucrar la indulgencia plenaria del Año jubilar, expresaba su «deseo, en primer lugar», que se dé una importancia fundamental a las dos condiciones

6. Cfr. Decreto conciliar *Christus Dominus*, n. 6. En adelante se citará con las siglas CHRD.

7. Cfr. CHRD, n. 28.

8. Cfr. CHRD, n. 29.

9. PO, n. 10.

requeridas: «a la confesión sacramental personal e íntegra, en la que se da el encuentro entre la miseria del hombre y la misericordia de Dios, y a la comunión eucarística recibida dignamente»¹⁰.

II. CONCEPTO DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA

Este concepto nos lo encontramos en el c. 959, del que ya antes se hizo mención: Ha venido este canon a sustituir al c. 870 del anterior Código. Este más limitadamente señalaba que «por medio de la absolución judicial dada por el ministro legítimo, se perdonan al fiel que esté convenientemente dispuesto, los pecados cometidos después del bautismo».

En el nuevo canon se mira directamente al penitente: desde su actitud de dolorosa compunción por los pecados cometidos. Su texto es el siguiente: «En el sacramento de la penitencia, los fieles que confiesen sus pecados al ministro legítimo, arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda, obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el mismo ministro y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron al pecar».

Pronto se advierte que se contienen en este precepto canónico lo que no había en la misma medida en el correspondiente del anterior Código. Se contienen los diversos actos del penitente —la confesión de los pecados, el arrepentimiento, el propósito de la enmienda—, así como lo que a la Iglesia compete, es decir la absolución dada por su ministro, y, por último, el efecto venturoso del perdón de Dios y de la reconciliación con la Iglesia.

Un elemento integrante de la penitencia, de lo que ha venido a llamarse *quasi-materia* del sacramento, falta en este canon. Es aquel que el c. 4 del Sacramento de la Penitencia del Concilio de Trento requería, con la contrición y la confesión, para que existiera *quasi-materia* del Sacramento: *la satisfacción*. Esta, con las anteriores, son designadas por aquel Concilio como partes de la penitencia¹¹. Esta parte, sin embargo, con la misma fuerza de las otras enumeradas en

10. JUAN PABLO II, *Bula «Aperite Portas», de Convocación del Jubileo para el 1950 Aniversario de la Redención*, 6-1-1983, cfr. n. 4.

11. Denz-Sch., 1704.

el c. 959, la encontraremos exigida en el c. 981, en donde aquel encuentra su complemento y su acabado término, redactado con una fuerza imperativa que no deja lugar a dudas: «Según la gravedad y el número de los pecados, pero teniendo en cuenta la condición del penitente, el Confesor debe imponer una satisfacción saludable y conveniente, que el penitente está obligado a cumplir personalmente».

Aquí tenemos, en estos dos preceptos canónicos, todas las claves que regulan en su esencia el sacramento de la penitencia y para que este sacramento produzca su efecto saludable.

El Derecho desea acoger en sus preceptos todos los elementos fundamentales de orden teológico y hasta pastoral, como puede ser esa frase de naturaleza prudencial —«teniendo en cuenta la condición del penitente»—, para dirigirse a la comunidad constituida en Pueblo de Dios, y preceptuarle lo que Dios mismo, y la Iglesia en su nombre exige, para el perdón de los pecados y la reconciliación con la Iglesia. De forma concisa e imperativa, con claridad y con exigencia, muestra así, de modo compendiado y preceptivo, qué se le pide al fiel para ser perdonado de sus pecados, qué actitud debe adoptar el ministro de la Iglesia ante esos deseos de perdón y reconciliación que el fiel manifiesta.

La Penitencia como virtud y como Sacramento es estudiada por la Teología; mas, al mismo tiempo, es culto de Dios, sometido a normas litúrgicas y requiere de un rito sagrado; a la vez, como medio externo, signo sacramental de reconciliación con la Iglesia y del perdón de Dios, en el que se generan relaciones de justicia, a pesar de la gratuidad con que el don de Dios se entrega al hombre, es contemplado también por el derecho en sus elementos más fundamentales, en la nervatura de su construcción y de las exigencias y responsabilidades que genera la confección y administración del Sacramento. En rigor, todo Sacramento, como señala Schmaus, es «sobre todo una *realidad oculta*»¹². Portadores de la semejanza entre el signo y el contenido «son las *cosas naturales* y la *palabra* con que esas cosas naturales son determinadas más concretamente. Cosa natural y palabra fundan el fenómeno visible del sacramento, que por *divina virtud* se cumple y se hace capaz de producir la realidad sacramental que es la gracia»¹³.

En cuanto signo, el Sacramento puede y debe ser contemplado por

12. M. SCHAMUS, *Teología dogmática*, VI, Madrid 1963, p. 22.

13. *Ibidem*, pp. 23-24.

el jurista y analizado en cuanto a las exigencias requeridas para que este signo de la gracia se dé con toda su eficacia salvadora. Pero como signo a su vez de una realidad invisible, medio e instrumento del amor salvador de Dios, hecho presente en la historia humana a través de Cristo¹⁴, ejecutarlo, realizarlo, es llevar a cabo la adoración de Dios, por la que el hombre a El se somete y le da gloria, logrando participar así de la gloria de Dios. Por esto, el Sacramento es también liturgia y culto, por el que se encuentra el hombre con Cristo y se conforma a El, configurándose según la imagen del Dios revelado hecho hombre en Jesucristo.

La acción de Dios es siempre antecedente, concomitante y superior a toda acción humana. El Derecho Canónico, en estos casos, se limita a contemplar, analizar y ordenar los diversos hilos con que se trenzan estas relaciones derivadas de la acción salvadora de Cristo para con los hombres, procurando describirlos, si bien con la torpeza que el hombre siente para expresar lo inefable, pero a la vez partiendo de la seguridad que ofrecen los datos revelados a la luz del magisterio de la Iglesia. Procurará, pues, el Derecho dibujar las líneas externas visibles, significativas de la realidad invisible y misteriosa con que Dios opera en el interior del hombre, este hombre llamado por Jesucristo a la salvación. Y al describirlas, en su configuración, determinará fundamentalmente lo que es necesario, lo imprescindible —para su validez— para que el Sacramento opere la gracia significada. Aparte de que pueda disponer de otras normas para su licitud por razón del respeto, veneración y delicado trato que el Sacramento en su confección y administración merece¹⁵.

Pero veamos, a partir de ahora, esas distintas líneas de fuerza por las que opera la gracia en el Sacramento de la Penitencia, según lo dispone el nuevo Código.

III. LOS DIVERSOS ACTOS DEL PENITENTE EN EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA O RECONCILIACIÓN

1.º *La realidad del pecado*

Su consideración pertenece a la Teología moral, excede a la in-

14. Cfr. *ibidem*, p. 50.

15. Los sacramentos en cuanto objetos de regulación por la Iglesia, es decir, el

vestigación del jurista. «El pecado y la muerte —enseña Juan Pablo II—, son enemigos del reino porque en ellos se sintetiza, en cierto sentido, el mal que ha penetrado en el corazón del hombre y en su historia»¹⁶. Citando a Sto. Tomás (S. Th. 2-2, q. 104, art. 3), Pietro Palazzini advierte: «Quien peca muestra con los hechos que no le conmueven sus divinos atributos». Hay, dice, «una circunstancia que agrava inmensamente la malicia del acto. El hombre, criatura de Dios, desprecia a su Creador, y mientras desprecia a Dios, busca sumamente otras cosas inferiores y es precisamente por éstas por las que desprecia a Dios»¹⁷. «El Pecado —ilustra Juan Pablo II— retira a Dios del lugar central que le es debido en la historia de los hombres y en la historia personal de cada hombre»¹⁸.

Pero ésto es algo de lo que el jurista ha de partir, un presupuesto para su trabajo, que le ofrece la Teología moral. Sin embargo, el jurista ha de procurar saberlo bien distinguir del delito, pues si el *elemento subjetivo* de la imputabilidad moral es «sustancialmente idéntico en el pecado y en el delito», el *elemento objetivo formal* —al decir de Ovidio Cassola— del pecado es la *aversio a Deo*, mientras el del delito es el «daño social (mediato), que brota fácilmente del pecado externo en cuanto éste induce a otros a la perversión»¹⁹. Si el pecado es fundamental «para el nacimiento del delito y para la aplicación de la pena», en cambio, sólo «el pecado reviste la índole de delito cuando es reconducido en perjuicio de la sociedad eclesiástica y es sancionable con una pena»²⁰.

También interesa al jurista conocer que el pecado, del que ha de confesarse para recibir el sacramento de la penitencia, ha de ser un pecado personal, un pecado a él imputable, del que ha de dolerse

Derecho Canónico en cuanto es también Derecho Sacramental, lo dejó resuelto el Concilio de Trento. Como señala E. MOLANO —*Dimensiones jurídicas de los Sacramentos*; VV. AA., *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*, Pamplona, 1983, p. 520—, a la vez que en Trento se resolvió la cuestión de los Sacramentos por Cristo, se declaró, *salva eorum sustancia*, que la Iglesia tiene poder «para determinar más concretamente (...) los requisitos necesarios para su lícita administración e incluso para su validez a la hora de confeccionarlos y administrarlos».

16. JUAN PABLO II, *Homilia* en el Santuario del Amor Misericordioso, Collevalenza, 22-XI-1981.

17. P. PALAZZINI, *El Pecado*; VV. AA., *Realidad del pecado*, Madrid 1962, p. 22.

18. JUAN PABLO II, *Homilia* en la Basílica de la Aparecida (Brasil), 4-VII-80.

19. O. CASSOLA, *Delito y pecado en el Derecho Canónico*, VV. AA., *Realidad del pecado*, ob. y ed. ctds., p. 171.

20. *Ibidem*, p. 172.

y tener el propósito de enmienda; un pecado personal del que ha de confesarse porque le incumbe y pesa en la conciencia. Como señala Raimundo Spiazzi, «en cuanto el pecado tiene fuerza interiormente disgregadora del hombre, es fácil que con tal fuerza él obre también en la sociedad humana y en la historia; por tanto, lleva en su seno el primer factor de desunión y de dispersión»²¹. Las cosas que manchan al hombre²² —añade— «pesan sobre la humanidad a lo largo de todo su camino en la historia»; sin embargo, esta dimensión social del pecado, no se opone a que se pueda satisfacer la pena del pecado ajeno «por la persona amada, asumiendo así una deuda», a juicio de Sto. Tomás (S. Th. I-II, q. 87, a. 7); en cambio, cuando «hablamos de la *pena infligida por el pecado*, tomada en su esencia de pena, entonces cada uno es castigado por su pecado: porque el acto del pecado es algo personal», como también afirma el Santo (S. Th. I-II, q. 87, a. 8)²³.

Al jurista le interesa asimismo saber que «el pecado, siendo cosa de suyo mala y contraria a Dios, no puede ser parte constitutiva de un sacramento que tiene por objeto reconciliar al hombre con Dios y reintegrarlo a su amistad». Por esto, «los teólogos escolásticos expresaron muy exactamente esta doctrina diciendo que los actos buenos del penitente —dolor, propósito, detestación— son la materia *próxima* del sacramento de la penitencia, y sus pecados la materia *remota*; con lo cual se significa que la materia constitutiva del sacramento está integrada por aquellos actos buenos, que, a su vez, deben recaer sobre el pecado cuyo perdón se trata de obtener»²⁴. «Los pecados, pues, «son materia de la penitencia, pero materia —como dice Santo Tomás— *non attentanda, sed detestanda et destruenda* (3, q. 84, a. 2)»²⁵.

El Código, en su c. 959, prescribe que los fieles han de confesar sus pecados, dolerse de ellos, tener propósito de enmienda. Además, el c. 960 instruye que el pecado mortal sólo puede ser perdonado —salvo la excusa de la imposibilidad física o moral— por la confesión individual e íntegra y la absolución, constituyendo éste el único modo

21. R. SPIAZZI, *El pecado, mal social*; VV. AA., *Realidad del pecado*, ob. y ed. ctds., p. 181.

22. Cfr. Mt 15, 19-29.

23. Cfr. R. SPIAZZI, ob. y ed. ctds., p. 189.

24. S. RAMÍREZ, *Introducción General, Summa Teológica de Sto. Tomás de Aquino*, XIV, Madrid 1957, p. 17.

25. *Ibidem*, p. 68.

ordinario para reconciliarse, en tal caso, con Dios y con la Iglesia. Al mismo tiempo, el c. 989 declara que todo fiel que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesarse fielmente sus pecados graves al menos una vez al año. También es la teología moral la que nos ilustra acerca de la gravedad del pecado.

Interesa hacer aquí resaltar, además, cómo *el Código*, en bien siempre del fiel, *convierte lo que es obligación suya en un derecho*²⁶, *el derecho a confesarse*: así lo dispone el c. 991 cuando declara, primero, el derecho de todo fiel a confesarse; y segundo, de elegir libremente confesor, siempre que esté legítimamente aprobado —el que prefiera—, aunque sea de otro rito (debiéndose entender de rito católico, según lo establecido en los cc. 111-112). Para lo que se refiere a otras Iglesias cristianas, que no estén en plena comunión con la Católica Romana, se habrá de estar a lo que dispone el c. 844, inspirado en su regulación por el Decreto del Concilio Vaticano II sobre Ecumenismo *Unitatis Redintegratio*.

Estamos, pues, ante un *ius* fundamental de todo bautizado para obtener de la Iglesia los medios de salvación que ésta posee por virtud de Jesucristo y distribuye entre sus fieles. Un *ius* que obliga a todos los sacerdotes de la Iglesia, en primer lugar, a oír confesiones en peligro de muerte del penitente; en segundo lugar, a todo sacerdote aprobado de confesor, los cuales están obligados a oír confesiones de los fieles (vid. c. 986 § 2); y, en tercer lugar, a que todo aquel que tiene por oficio la cura de almas, queda obligado a proveer que se oiga en confesión a los fieles que le están confiados y que razonablemente lo pidan (c. 986 § 1): a este fin se les debe dar oportunidad —prescribe este canon— a que se acerquen a la confesión individual los fieles que le están confiados, señalando al efecto días y horas determinadas que les resulten asequibles.

Estamos, pues, ante un deber de justicia que debe ser satisfecho por los obligados, los ministros del Sacramento de la Penitencia. Hasta tal punto, este deber, de atender en confesión a los fieles que lo solicitan, es importante, que Pablo VI, en un Discurso, dijo: «Los sacerdotes pueden verse obligados a posponer o incluso a dejar otras acti-

26. J. HERVADA —*Las raíces sacramentales del Derecho Canónico*; VV. AA., *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*, Pamplona 1983, en especial pp. 370-377—, con terminología jurídica, dice: «el pecador arrepentido tiene ante el ministro una especie de *ius ad rem* respecto del perdón, por virtud de los méritos de Cristo que le están destinados: supuesta esta economía divina, el acto absolutorio del ministro no es pura misericordia sino también justicia» (p. 376).

vidades por falta de tiempo, pero nunca el confesionario»²⁷. Con esto reiteraba las *Normas Pastorales* de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, de 16.VI-1972²⁸, entre cuyos preceptos se disponía —norma IV— que «para que los fieles puedan satisfacer fácilmente la obligación de la confesión individual, procúrese que haya en las Iglesias confesores en días y horas determinados, teniendo en cuenta la comodidad de los fieles» (anteriormente estos preceptos estaban recogidos —aunque expresados de modo distinto— en el Código del 17, c. 892).

Precisamente esta obligación de los ministros sagrados ha sido puesta de nuevo de relieve por el Papa Juan Pablo II en la Bula *Aperite Portas*, de convocación del Año Jubilar de la Redención, al decir: «Es exigencia del mismo misterio de la Redención que el ministerio de la reconciliación, confiado por Dios a los Pastores de la Iglesia, encuentre su natural realización en el sacramento de la Penitencia. De ello son responsables los Obispos, que son en la Iglesia los administradores de la gracia derivada del sacerdocio de Cristo, participado a sus ministros, también como moderadores de la disciplina penitencial; de ello son responsables los sacerdotes, los cuales pueden unirse a la intención y a la caridad de Cristo, particularmente administrando el sacramento de la Penitencia»²⁹.

Ya el Decreto Conciliar *Christus Dominus* recordaba a los Párrocos que dieran «facilidades para escuchar las confesiones de los fieles, llamando para ello, si es preciso, a otros sacerdotes que hablen lenguas diferentes»³⁰. Y en el Decreto *Presbyterorum Ordinis* se animaba a los sacerdotes a «mostrarse plenamente dispuestos a administrar el Sacramento de la Penitencia todas las veces que los fieles lo pidan razonablemente»³¹.

Ese derecho a confesarse es, además, a confesarse con libre elección del sacerdote, basta que esté aprobado, lo cual resulta perfectamente compatible con el precepto del c. 985 —reproducción aunque simplificada del antiguo c. 891—, que manda al maestro de novicios y su asistente, al rector del Seminario o de otra institución educativa, a que no oigan confesiones sacramentales de sus alumnos residentes en la misma casa. El precepto, si bien está redactado con fuerza de

27. PABLO VI, *Discurso* a los Obispos, Nueva York, 20-IV-1978.

28. AAS, 64, 1972, pp. 510-514.

29. JUAN PABLO II, *Bula* ya citada en nota 10; n. 6.

30. CHRD, n. 30.

31. PO, n. 13.

prohibición jurídica, cuenta, sin embargo, con la excepción de que la voluntad espontánea de ese alumno, en casos particulares, desee lo contrario. Entonces la norma jurídica cede al bien que para el alumno significa ejercer su libertad de elección en el caso concreto.

El deseo de librarse del pecado grave, por tanto, genera en el fiel un derecho irrenunciable que la Iglesia ha de proveer satisfacer en toda ocasión por el ministerio de sus sacerdotes. Lo que es obligación de precepto, caso de pecado grave, para el fiel que haya llegado al uso de razón (c. 989) —al menos una vez al año—, obliga a la Iglesia —también para evitar cualquier indiscreción en tema tan delicado— a ofrecer un servicio del Sacramento de la Penitencia apto para su fácil utilización por todos los fieles, quienes unas veces acudirán al sacramento porque lo necesiten para recibir la gracia de la que por el pecado grave se vieron privados; pero también otras veces porque la devoción les impulsa a servirse de la gracia que el Sacramento proporciona aunque no se esté alejado de Dios por el pecado grave.

También, para terminar de describir el cuadro en que nos movemos, el c. 914 dispone que tanto los padres como los Párrocos cuiden que los niños que, llegados al uso de razón, se preparan para recibir por primera vez el divino alimento eucarístico, sean antes oídos en la Confesión sacramental. Como sabemos, *al experimentum* se permitió, por vía de tolerancia, ciertas prácticas contrarias a lo que dispuso S. Pío X el 6.VIII.1910, en el Decreto *Quam singulari* ³². A esta práctica posible contraria puso fin una *Declaración conjunta de las Sagradas Congregaciones para la disciplina de los Sacramentos y de la de los Clérigos* aprobada por Paulo VI el 24.V.1973 ³³. Ahora este nuevo canon, inserto en el Título de la Santísima Eucaristía (III, Pars Prima, Libro IV), y no en el de la Penitencia, ratifica lo que últimamente se dispuso.

2.º La Confesión de los pecados

Gran parte de lo que hemos dicho en relación al pecado ha incidido en la exigencia del acto humano, tan necesario para el que acude a la Penitencia, que este sacramento viene siendo llamado comúnmente, desde antiguo, sacramento de la Confesión. El deber de

32. AAS, 2, 1910, p. 583.

33. AAS, 65, 1973, p. 410.

los ministros sagrados a prestarse a recibir confesiones, la obligación del fiel en pecado grave de confesarse en el año, el derecho del fiel a la confesión y al confesor aprobado libremente elegido, nos descubren que esa confesión del penitente es un acto personal suyo en presencia de un ministro sagrado, llamado confesor, que recibe en el sacramento esa autoculpación por los pecados cometidos después del bautismo, una vez alcanzado el uso de razón. Si en el pecado hay una actitud siempre de soberbia, de rebeldía implícita o explícita a la voluntad de Dios, en la penitencia hay siempre un acto de profunda humildad, de sometimiento voluntario y humillado al querer divino.

a) *La confesión individual*

Las normas canónicas son claras. Comienzan por el c. 959: «En el sacramento de la penitencia, los fieles confiesan sus pecados a un ministro legítimo...». A continuación el c. 960 aún precisa más: «La confesión individual e íntegra y la absolución constituyen *el único modo ordinario* con el que un fiel consciente de que está en pecado mortal se reconcilia con Dios y con la Iglesia». Sólo en el caso de que haya imposibilidad física o moral queda excusada esta confesión, en cuyo caso cabe que la reconciliación se pueda tener por otros medios. Son, pues, medios extraordinarios porque coincide alguna imposibilidad que justifica la excusa del medio ordinario. Los cc. 970, 971, 972, 973 y 974, que determinan el régimen jurídico bajo el que se concede al ministro sagrado la facultad de confesar, evidencian que es facultad para oír, para recibir confesiones. También las mismas palabras —*facultate ad confessiones excipiendas*— utiliza el c. 968 y a ello se refiere el 967 y el 976. Y el c. 978 § 1 dice *sacerdos in audiendis confessionibus*.

Resulta aún más definitivo el c. 988, que en su § 1, señala al fiel la obligación que tiene de confesar todos sus pecados graves, según *su especie y número*. Todos sus pecados graves, de los que tenga conciencia *después de un examen diligente*, dice el precepto. No puede, por consiguiente, faltar el *examen de conciencia previo* para que en ese examen puedan determinarse los pecados cometidos después del bautismo y aun no remitidos directamente por la potestad de las llaves de la Iglesia, no acusados en confesión individual. Sólo así se asegura que la integridad formal de la confesión se aproxime, en lo humanamente posible, a la integridad material.

Es más, en el c. 988 § 2 se recomienda a los fieles que confiesen asimismo los pecados veniales. De este modo también se invita a la

que suele designarse como confesión de devoción. Decía Juan Pablo II a los Obispos alemanes: «Estoy convencido de que un reconocimiento de la conciencia moral y de la vida cristiana va estrecha e indisolublemente unido a una determinada condición: a *la revitalización de la confesión personal*. ¡Haced de esto una prioridad en vuestro empeño pastoral!»³⁴. No resulta, por tanto, extraño que el propio Pontífice posteriormente dijese: «El Sacramento de la Penitencia no sólo es instrumento directo para destruir el pecado —momento negativo— sino ejercicio precioso de virtud, expiación él mismo, escuela insustituible de espiritualidad, profunda labor altamente positiva de regeneración en las almas del *vir perfectus, in mensuram aetatis plenitudinis Christis* (Cfr. Eph. 4,13)»³⁵.

Frente a Lutero, que sostuvo que la confesión de todos los pecados no era obligatoria porque era imposible recordar todos los pecados, en el c. 7 del Concilio de Trento³⁶ se afirmó *iure divino* la necesidad de confesar todos y cada uno de los pecados mortales, incluidos los secretos, así como las circunstancias que cambian la especie de pecado. Esto se ha de entender en cuanto a los pecados «de que podamos acordarnos tras habernos examinado con la diligencia requerida». Schmaus hace notar que ya el Concilio de Constanza (Dz. Sch. 587, 670) declaró dogma de fe esta necesidad, por ordenación divina, de confesar todos los pecados graves cometidos después del bautismo y después de un examen cuidadoso y obligatorio. Como añade este autor, «los sacerdotes no hubieran podido ejercer este juicio sin conocer las causas, ni guardar la equidad en la imposición de las penas, si los fieles declaran sus pecados sólo en general y no en especie y uno por uno»³⁷. No se trata de torturar la mente de los fieles, sino que lo que se exige por Trento es que se confiesen los fieles de los pecados graves de cuya existencia tengan conciencia después de un diligente examen. Exactamente lo que viene a decir hoy el c. 988 § 1: El conocimiento de los pecados para que el confesor pueda emitir su juicio, de los que únicamente quien puede informar es el penitente, el cual, además, es el único que puede conocer la malicia de sus actos y quien puede mostrar la prueba de su verdadera contrición; conocimiento que permite al confesor imponer

34. JUAN PABLO II, *Discurso* a la Conferencia Episcopal Alemana, 13-XI-1980.

35. JUAN PABLO II, *Discurso* a la Sagrada Penitenciaría Apostólica y a los Penitenciaríos de las Basílicas Patriarcales Romanas, 30-I-1981.

36. Denz-Sch. 1707.

37. M. SCHMAUS, *ob., t. y ed. ctds.*, p. 581.

una satisfacción justa, proporcionada a la gravedad y número de los pecados.

Cristo —dice Pierre Adnés—, «al instituir el sacramento de la penitencia, no ha podido menos de pretender todo cuanto condiciona intrínsecamente la administración de este sacramento, y, por ello, la acusación del penitente»³⁸. También hace notar este autor que, entre los teólogos de Trento, «Melchor Cano y Juan Grepper deducían la necesidad de la confesión a partir de la naturaleza medicinal del sacramento de la penitencia, que exige el conocimiento de la enfermedad»³⁹. Aunque en el nuevo Código no se califique a la absolución de *judicial*, sin embargo, su c. 978 § 1 sigue advirtiéndolo lo siguiente: «Al oír confesiones, tenga presente el sacerdote que hace las veces de juez y de médico».

Toda la nueva disciplina de la Penitencia cuenta con esta necesidad de la confesión individual e íntegra como medio ordinario de perdón y de reconciliación. Por ésto el c. 964 preceptúa el lugar propio —iglesia u oratorio— para oír las confesiones, debiendo existir en ellos siempre en lugar patente confesionarios con rejilla fija entre el confesor y el penitente, para que lo usen libremente los fieles que lo deseen, prohibiéndose, salvo causa justa —§ 3—, que se oigan confesiones fuera del Confesionario. Si a las Conferencias Episcopales se les reserva el poder de dictar normas sobre el confesionario, a mi juicio debe entenderse éstas condicionadas por lo que acaba de indicarse, que son las normas generales al respecto.

Igual sentido tiene el contexto legislativo que ofrecen otros cánones, como el 977 que prohíbe, salvo en caso de muerte —con amenaza de su invalidez—, la absolución del cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento del decálogo. Lo mismo ocurre con lo que dispone el c. 979 en relación al comportamiento prudente y discreto que ha de observar el confesor al interrogar, absteniéndose siempre de preguntar sobre el nombre el cómplice. Lo mismo si se contempla la norma del c. 981 relativa a la satisfacción a imponer por el confesor al penitente, según la gravedad y número de los pecados. La inviolabilidad del sigilo sacramental del c. 983 § 1; la obligación moral de guardar secreto el intérprete (c. 983 § 2); el hecho mismo de que no se prohíba a nadie la confesión

38. P. ADNÉS, *La penitencia*, Madrid 1981, p. 185.

39. *Ibidem*, p. 186.

mediante intérprete, con tal de que se eviten abusos y escándalos (c. 990); el que no pueda jamás el confesor hacer caso, en perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la Confesión; y si se trata de autoridad, que no pueda hacer uso, para el gobierno externo (c. 984), del conocimiento de pecados que adquiriera por confesión, etc. Todos ellos son datos bien esclarecedores de que el régimen jurídico actual de la Penitencia tiene siempre como objetivo claro que el único medio ordinario de absolver los pecados graves, mediante este sacramento, es por la confesión individual e íntegra de los pecados graves, contando su número y describiendo su especie.

Sin embargo, el haberse destacado en el Concilio Vaticano II el aspecto social de la penitencia por mostrar en su doctrina que, con el perdón de los pecados, se obtenía al mismo tiempo la reconciliación con la Iglesia, se llegó a entender erróneamente por algunos que la doctrina sobre la penitencia había cambiado y, en consecuencia, también la *praxis* del Sacramento. La Iglesia hubo de salir al paso de los abusos que se produjeron mediante las *Normas pastorales* de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, del año 1972⁴⁰. Estas normas, en su Preámbulo, tuvieron que recordar la doctrina de Trento, y en especial lo que se refiere a la integridad de la Confesión. Y en su norma I, se dijo expresamente: «se ha de mantener con firmeza y se ha de continuar poniendo fielmente en práctica la doctrina del Concilio de Trento». No ha cambiado la doctrina, se dijo entonces, y tampoco cambia sustancialmente la disciplina canónica, según la cual es la confesión individual e íntegra y la absolución también individual *el único* modo ordinario de reconciliación con Dios y con la Iglesia, salvo que una imposibilidad física o moral excuse de esta Confesión.

Publicado al siguiente año el *Ordo Penitentiae*⁴¹, en él se volvió a reiterar la misma doctrina (cfr. Praenotanda, n. 31). Y en él, como sabemos, se prescribieron tres ritos para la celebración del Sacramento: el A para la reconciliación de un sólo penitente, que responde perfectamente a ese único medio ordinario que hoy contemplamos en el c. 960. El rito B se dispuso para reconciliar a varios penitentes, destacándose el aspecto comunitario de las oraciones de preparación para el sacramento, pero requiere igualmente,

40. Cfr. nota 28.

41. Lleva fecha de 2-XII-1973.

para que se dé el signo sacramental, que haya confesión y absolución individuales, conforme también con lo que ha sido requerido por este citado c. 960. La diferencia, sin embargo, entre el rito A y el B es meramente accidental, puesto que, en su esencia, uno y otro rito exigen, a cada penitente, que se atenga a todos los actos propios del único medio ordinario para la práctica de este sacramento.

Por último, para determinadas circunstancias de grave necesidad, se previó la absolución general, según el llamado rito C. Pero en estas hipótesis, modo extraordinario de la Penitencia, rigen unos criterios coincidentes con los que ahora se regulan en el c. 961, y que los estudiamos seguidamente.

b) *Medios excepcionales de absolución de los pecados*

Utilizamos el término excepcional, porque, contra lo dispuesto en el c. 960, se tratan de hipótesis de hecho que excusan del medio ordinario en razón a una imposibilidad. Pudieran llamarse también «medios extraordinarios», en oposición al ordinario, pero la ambigüedad de aquel término aconseja utilizar el término de excepción, que explica la naturaleza eventual de su ejercicio. Este medio excepcional se regula en el c. 961, que comienza con una prohibición genérica de la absolución general a varios penitentes. Comienza, pues, negando este poder absolver, para pasar a admitirlo, sin embargo, en dos hipótesis, como digo, excepcionales.

1) *Peligro de muerte* y carencia de tiempo para oír en confesión el sacerdote a cada penitente.

Esta causa excusante de la confesión personal se aplicó en caso de guerra: En 6.II.1915 se publicó una Declaración de la Sagrada Penitenciaría a este respecto ⁴², y en 8.XII.1939 —con ocasión de la 2.^a Guerra mundial— Pío XII concede de nuevo facultades, en tal sentido, sirviéndose de la Sagrada Congregación Consistorial ⁴³. Estas facultades se amplían por la Sagrada Penitenciaría, mediante una Instrucción de 25.III.1944 ⁴⁴, a las poblaciones civiles que sufren bombardeos y para cuando se verifique otra grave y urgente necesidad proporcionada, como temblores de tie-

42. AAS, 7, 1915, p. 72.

43. AAS, 31, 1939, p. 712.

44. AAS, 36, 1944, pp. 155-156.

rra, inundaciones, incendios, etc. En esta Instrucción se inspiraron las *Normas pastorales* de 1972, que fueron a su vez extractadas en el *Ordo Penitentiae* (31-32) del siguiente año. Estas normas fueron seguidas en su aplicación de cierto abuso, lo cual motivó diversos pronunciamientos correctivos por el Magisterio de la Iglesia en diversas ocasiones. Este proceso de clarificación puede entenderse concluido con la vigencia del nuevo canon 961 más los 962 y 963 que completan esta disciplina. Veamos cómo ha quedado el nuevo régimen:

2) *Que haya una necesidad grave* (c. 961, § 1, n.º 2.º). A continuación el precepto describe las hipótesis en las que se estima existe necesidad grave; «cuando, teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno dentro de un tiempo razonable»; por este motivo resulta que «los penitentes, sin culpa por su parte, se verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión».

Estas dos son, por tanto, las circunstancias que han de concurrir para estimar que existe una causa excusante en razón a la grave necesidad. Pero a continuación se da una norma indicativa para ilustrar aquellas hipótesis en las que, pudiendo darse ese número abundante de penitentes y la falta a su vez de confesores, sin embargo, no hay motivo para la excusa: «no se considera suficiente necesidad cuando no se pueda disponer de confesores a causa sólo de una gran concurrencia de penitentes, como puede suceder en una gran fiesta o peregrinación». Lo previsible, pues, queda descartado, si con tal previsión se hubiera podido satisfacer la necesidad que más tarde se planteará.

Pero el legislador universal de la Iglesia no sólo restringe en una gran medida esta hipótesis de absolución colectiva o general, sino que excluye la iniciativa del sacerdote-confesor para el juicio de su oportunidad. Esto lo reserva —c. 961 § 2— al Obispo diocesano, quien únicamente juzgará si se dan los requisitos del § 1, n.º 2.º; éste, teniendo en cuenta los criterios acordados con los demás miembros de la Conferencia Episcopal, puede determinar los casos en los que se verifique esa necesidad. No pueden éstos, en cambio, como ya indicó Paulo VI, «cambiar las condiciones requeridas, sustituirlas con otras, o determinarlas según criterios personales»⁴⁵.

45. PABLO VI, *Discurso*, 20-IV-1978.

Se ha de tener en cuenta que, en cambio, tanto las Normas de 1972 como el *Ordo Penitentiae* —también en los primeros esquemas del Código⁴⁶— dejaban al juicio del sacerdote-confesor el juzgar de la existencia de otra grave necesidad, siempre que no pudiera acudir al Ordinario. Es significativo que tal posibilidad haya desaparecido por completo del nuevo cuerpo legal canónico.

Resulta, por congruente, decisivo, para estas hipótesis, el juicio del Obispo diocesano. Sin este juicio, el sacerdote que absuelve indebidamente carece —a mi parecer— de la facultad de absolver válidamente de los pecados, requerida a quienes dan la absolución del c. 966 § 1, junto con la potestad de orden. Supongo que este tema hará correr en el futuro variedad de opiniones procedentes tanto de los cultivadores de la teología como de la ciencia canónica. Esta es consciente que temas, como el presente, no es una cuestión de legalismos como a veces algunos piensan. Verlo así es una frivolidad inaceptable. El canonista sabe que la gracia procede de Jesucristo y se entrega por la Iglesia a los fieles en virtud de una potestad que ha recibido, a la que guarda fielmente observancia y así entrega la gracia del Señor a los fieles. No somos los clérigos funcionarios de una organización que nos permita entregar bienes o conceder ventajas con sólo suscribir un documento de otorgamiento, sino dispensadores fieles de la gracia de Dios, de la que hacemos —como instrumentos— donación a los hombres, si nos sometemos, para su administración y dispensación, a los cauces de que la Iglesia se sirve, según el poder recibido de Cristo, para otorgar la fuerza y el vigor del signo sagrado con el que se entrega eficazmente la gracia que en él se representa⁴⁷. El desafío a la ley no es equiparable a la duda o al error de hecho o de derecho para poder, en estos casos de flagrante desobediencia, invocar la suplencia de jurisdicción (cfr. c. 144 § 2).

3) *El voto de confesión individual*

Aunque, caso de imposibilidad física o moral, por grave necesi-

46. Cfr. *Communicationes*, X, 1978, p. 52.

47. J. HERVADA —ob. y ed. ctds., p. 369— lo expresa con manifiesta claridad: «Los sacramentos pueden ser derechos —*res iustae*—, si el ministro es sólo el autor del signo externo y actúa como mero instrumento de realización del acto simbólico. En otras palabras, los sacramentos podrán ser derecho si para su eficacia no cuentan

dad en circunstancias determinadas, puede recibirse la absolución de los pecados sin la previa confesión individual e íntegra, sí, en cambio, el deseo sincero de hacerla ha de estar en el penitente que recibe esta absolución, pues en otro caso ésta es inválida. Así nos instruye el c. 962: el penitente no sólo debe estar debidamente dispuesto, a la hora de recibir la absolución colectiva —es decir, ha de tener el arrepentimiento o dolor requeridos y el propósito de enmienda—, sino que también —*ad validitatem*— se requiere que tenga propósito de confesarse a su debido tiempo de todos los pecados graves que en estas circunstancias no pudo confesar. Este tiempo, según el c. 963, es cuanto antes —*quam primum*—, y sin que pueda mientras tanto recibir otra absolución colectiva, al menos que se presente justa causa. Dado, además, que este c. 963 declara que, al mismo tiempo, se mantiene la obligación de confesar fielmente los pecados graves al menos una vez al año, este cómputo de tiempo debe cuidarlo el penitente para lucrarse de la absolución colectiva recibida.

Por consiguiente, se manifiesta así que en rigor la Iglesia no dispensa de los actos propios del penitente para recibir el sacramento de la penitencia, sino que la confesión personal e íntegra de los pecados es una exigencia permanente, que ha de hacerse compatible con unas circunstancias, de grave necesidad por imposibilidad, en cuya hipótesis, con base al propósito de confesar posteriormente, cuando sea posible, anticipa la absolución, beneficiando a los fieles, dispuestos debidamente a confesarse, de unos frutos de gracia que, de otro modo, no les sería posible recibir. Adnés —sirviéndose de los argumentos de Sto. Tomás, en S. Th. III, q. 84, a. I ad 5; q. 86, a. 6 ad 1; *Supplem.* q. 5, a. 1 y q. 18 a. 1— dice que la contrición del penitente «es ya el efecto del sacramento, que actúa en cierto modo de antemano, por medio del deseo que se tiene de recibirlo. Este voto del sacramento —añade— tiene una eficacia quasi sacramental (...). El obtendrá la remisión del pecado, y, con ella, la justificación, en el sacramento mismo, actualmente recibido, porque el sacramento de la penitencia, como el sa-

el mérito ni las disposiciones del ministro, al que sólo se pide que haga correctamente el signo, esto es, que actúe como verdadero realizador del símbolo según lo que la Iglesia le exige: materia, forma e intención *faciendi quod facit Ecclesia*. Pues bien, como dice Santo Tomás, Cristo pudo comunicar a los ministros su potestad de excelencia, pero no lo hizo; del ministro sólo se pide que haga correctamente el signo» (Cfr. S. Th. III, q. 64, aa. 1, 4 y 5).

cramento del bautismo, opera la remisión del pecado, «*vel in voto existens, vel in actu se excersens*»⁴⁸.

En estos casos surge un deber inexcusable para el sacerdote que imparte la absolución general o colectiva, deber que se contiene en el c. 962 § 2: Se ha de instruir a los fieles en la medida de lo posible, cuando van a recibir la absolución general, de los requisitos de grave necesidad que excusan en aquel momento del precepto de la confesión personal, y se exhortará, antes de impartirla —incluso en peligro de muerte si hay tiempo—, a que cada uno haga el acto de contrición.

Indudablemente, es medida pastoral muy recomendable, si hay también tiempo —para que adquieran conciencia del bien que reciben y de sus responsabilidades—, preparar el acto de absolución con una invitación a que hagan examen diligente de conciencia, debiéndoseles instruir con claridad de que han de tener el propósito, si están en pecado grave, de confesarse cuanto antes, pues de carecer de tal propósito sería inválida la absolución que se les imparte.

3.º *Dolor de los pecados y propósitos de enmienda*

Estos dos elementos que integran el acto del penitente, constituyen, con la confesión de los pecados, lo que se designa en teología como *sacramentum tantum* de la penitencia⁴⁹, es decir, signo externo que, en cuanto se manifiesta sensiblemente, son la materia del sacramento. Su estudio pertenece a la Teología y no al Derecho. Son actos de la virtud de la penitencia. Es decirle al Señor, con el dolor del arrepentido de su pecado, lo que el hijo pródigo dice a su Padre, «he pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo»⁵⁰.

Describió Pablo VI de modo muy ilustrativo en qué residía la penitencia: «¿Qué significa penitencia, «metánoia» en griego, en el lenguaje escriturístico? Significa conversión, como todos sa-

48. P. ADNÉS, *ob. y ed. citds.*, p. 149.

49. Recientemente E. TEJERO —*La «res et sacramentum». Estructura y espíritu del ordenamiento canónico, Síntesis doctrinal de Sto. Tomás*; VV. AA., *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*, Pamplona 1983, pp. 427-460— ha tratado estos temas con gran profundidad. En relación a la penitencia, interesan especialmente pp. 428-431 y 452-460.

50. Lc 15, 21.

ben, cambio de mentalidad; y se refiere este cambio al estado del hombre pecador, necesitado de cambiar de vida y de dirigirse a Dios y, por ello, deseoso de llorar las propias faltas (...) es, ante todo, un conjunto de actos interiores: es una alteración de pensamientos, es una conciencia de la propia anormalidad moral, de la propia indignidad, un reconocimiento de la propia irregular verdad personal, frente a Dios, la cual no puede ser otra cosa que una verdad humillante (...); y quien la expresa pronuncia sobre sí mismo un juicio de condenación, o bien tiene para sí una invocación de misericordia (...), que hace suya las palabras del publicano de la parábola, el cual no se atrevía a traspasar los umbrales del templo; y ni siquiera elevaba los ojos al cielo, sino que se daba golpes de pecho diciendo: ¡Oh, Dios, ten piedad de mí que soy pecador! » (Luc 18,13). Esta es la contrición, es la conversión, es la penitencia, de la cual, al venir al encuentro del hombre penitente la gracia, germina la nueva vida del alma»⁵¹.

Decía Juan Pablo II: «La penitencia en sentido evangélico significa sobre todo «conversión» (...). El fin de los actos de penitencia es un más profundo acercarse a Dios mismo para poderse encontrar en lo íntimo de la entidad humana, en el secreto del corazón». «Convertirse —añadía— quiere decir para nosotros buscar de nuevo el perdón y la fuerza de Dios en el sacramento de la reconciliación y así volver a empezar siempre, avanzar cada día, dominarnos, realizar conquistas espirituales y dar alegremente, porque 'Dios ama al que da con alegría' »⁵². Y en otro lugar aclaraba: «Para comenzar la Cuaresma, para *convertirse* a Dios de manera esencial y radical, es necesario retornar a ese «principio»; al origen del pecado humano y de la muerte, que arranca de él.

«Es necesario volver a encontrar la conciencia del pecado, que ha sido el origen de todos los pecados de la tierra; que se ha convertido en el fundamento durable y en la fuente del estado pecaminoso del hombre»⁵³.

Son también palabras de Juan Pablo II: «La *Conversión* es fundamentalmente *un alejarse del pecado y un dirigirse, un retornar al Dios viviente* (...). La conversión es un *don de Dios*, que el hombre debe pedir con ferviente oración y que nos ha merecido

51. PAULO VI, *Discurso* en la Estación cuaresmal de Santa Sabina, 26-II-1971.

52. JUAN PABLO II, *Audiencia General*, 28-II-1979.

53. JUAN PABLO II, *Homilía* del Miércoles de Ceniza en la Basílica de Santa Sabina, 20-II-1980.

Cristo, 'nuevo Adán'⁵⁴. «Por lo tanto —y concluyo con estas palabras de Juan Pablo II— emprendamos nuestro esfuerzo de conversión y de penitencia por El, con El y en El. Si no lo emprendemos, no somos dignos del nombre de Cristo, no somos dignos de la herencia de la redención»⁵⁵.

Esta corriente de vida sobrenatural que atraviesa de dolor el corazón del hombre, cambiando sus deseos hasta el punto de hacer de su corazón «un corazón contrito y humillado»⁵⁶, desde donde se generan propósitos de nueva vida, de enmienda para el futuro, permanece indudablemente oculta a los ojos de los hombres. El jurista no puede analizar ni comprobar lo que sucede en el corazón del hombre. La ciencia canónica se mantiene al borde del abismo que es el corazón humano invadido por la gracia de Dios, y sólo puede advertir, reclamar, hasta formular la monición vehemente al penitente, de que, sin esos sentimientos, sin esos impulsos interiores de la voluntad, no puede darse el perdón de los pecados mediante la absolución sacramental. Y al Confesor le recordará que ese dolor y ese propósito deben ser manifestados de algún modo.

Esto es lo que, en definitiva, pretende el c. 959 cuando indica que los fieles han de confesar sus pecados al ministro legítimo, «arrepentidos de ellos y con propósito de enmienda»; esto es lo que hace también el c. 962 § 1 cuando condiciona la validez de la absolución dada a varios a la vez, requiriendo del fiel «no sólo que esté debidamente dispuesto, sino que se proponga a la vez hacer en su debido tiempo confesión individual de todos los pecados graves que en las presentes circunstancias no ha podido confesar», señal a mi parecer cierta, caso de ser cumplida, de la sinceridad de ese dolor y de tal propósito. Y esto es, por último, lo que viene a recordar con un texto de tono enérgico el c. 987 cuando prescribe: «Para recibir el saludable remedio de la penitencia, el fiel ha de estar de tal manera dispuesto, que, rechazando los pecados cometidos y teniendo propósito de la enmienda, se convierta a Dios».

54. JUAN PABLO II, *Homilía*, Parroquia de San Juan Bautista de los Florentinos (Roma), 8-III-1981.

55. JUAN PABLO II, *Homilía*, Parroquia de San Ignacio de Antioquía (Roma), 16-III-1980.

56. Salmo 50, 19.

IV. EL MINISTRO DEL SACRAMENTO

El c. 965, con el que comienza el Capítulo II del nuevo Código, repite casi a la letra el c. 871 del Código derogado: «Sólo el sacerdote es ministro del sacramento de la penitencia». Pero, tras estos preceptos coincidentes, empiezan las diferencias.

En efecto, el c. 10 del Cap. 6, Sesión XIV del Concilio de Trento declaró falsas y totalmente ajenas a la verdad del Evangelio aquellas doctrinas que perniciosamente extienden el ministerio de las llaves a otros que a los obispos y sacerdotes⁵⁷. Si en la primitiva Iglesia, la reconciliación del penitente con la Iglesia dependía de la autoridad del Obispo, la introducción de la penitencia privada hace que, a partir de los VII y VIII, pase a ser el sacerdote el ministro ordinario de la penitencia. «Sin embargo —añade Adnés—, no por ello ha quedado independientemente del Obispo, puesto que para oír las confesiones y dar la absolución tiene necesidad de la jurisdicción conferida por el Obispo, a menos que no la tenga ya en virtud del oficio que está destinado»⁵⁸. Así resultaba, además, recogida en el c. 872 del Código de 1917.

«Los presbíteros —enseña el último Concilio ecuménico— son consagrados por Dios, mediante el ministerio del Obispo, para que hechos partícipes del Sacerdocio de Cristo, actúen en las celebraciones sagradas como ministros de Aquel que en nuestro favor ejerce constantemente en la Liturgia su función sacerdotal por medio del Espíritu (...); por el Sacramento de la Penitencia, reconcilian a los pecadores con Dios y con la Iglesia»⁵⁹.

Pero aquí nos encontramos la más notable diferencia con el anterior régimen canónico de la Confesión. En este —ya lo hemos hecho notar— el sacerdote necesitaba además tener potestad de jurisdicción, fuese ordinaria o delegada. Esta atribución de potestad jurisdiccional explicaba la reservación de pecados, pues la autoridad de quien dependía la potestad de jurisdicción, al hacer cesión a otro de esta potestad, en relación a este Sacramento, solía reservarse a su propia y directa jurisdicción la absolución de algunos pecados, entregando, por tanto, a los inferiores una potestad limitada. Clara muestra de ello son los cc. 893-900 del Código derogado.

57. Denz-Sch. 1684.

58. P. ADNÉS, *ob. y ed. citds.*, p. 159.

59. PO, n. 5.

La institución de la reservación de pecados ha desaparecido de los nuevos cánones. Su finalidad era «dar conciencia al pecador de su pecado y para darle ocasión a un arrepentimiento más vivo» ⁶⁰. ¿Es quizá esta la razón por la que ha desaparecido el término jurisdicción de los nuevos cánones? Es más, ¿no se necesita hoy, con el Orden, tener también la potestad de jurisdicción para oír confesiones y absolver? El c. 966 ha hecho uso, sin embargo, de una nueva terminología. En su § 1 prescribe que «para absolver válidamente de los pecados se requiere que el ministro, además de la potestad de orden, *tenga facultad* de ejercerla sobre los fieles a quienes da la absolución».

Parece que se ha intentado no obstaculizar una tarea sacramental, tan dependiente del Orden sacro recibido, en servicio en definitiva de todos los fieles, donde quiera que se hallen, con otros límites, como los de naturaleza territorial, ámbito que más influye en las restricciones que acompañan al ejercicio de la potestad de jurisdicción cuando ésta no es la que compete de modo propio y directo al Romano Pontífice. La disposición de servicio a toda la Iglesia, con la que el sacerdote no deja de ser contemplado por el Concilio Vaticano II, parece aquí tener una expresión gráfica significativa.

Por otra parte, la palabra jurisdicción, que no significa más, literalmente, que decir el derecho, durante la preparación del Código no se consideró la más adecuada para expresar la naturaleza de la facultad que goza el sacerdote al confesar, puesto que absolver no se aprecia como un acto de la potestad de régimen en sentido técnico ⁶¹. En el nuevo Código —c. 129 § 1— potestad de jurisdicción se entiende equivalente a potestad de régimen, y ésta se distingue en legislativa, ejecutiva y judicial (vid. c. 135), teniendo la última un ámbito de ejercicio que no es equiparable a la naturaleza del juicio que el Confesor ha de emitir en el Sacramento de la Penitencia. Ya cierta parte importante de la doctrina canónica, se había planteado el problema acerca de qué clase de *iudicium* es el que hace el Confesor. Para Klaus Mörsdorf, no se trata de un juicio en el sentido técnico de la palabra, sino de «un acto de *soberanía eclesiástica*, una acción del poder pastoral jurisdiccional. El juicio de la Iglesia —se advertía— en el Sacramento de la Peni-

60. M. SCHMAUS, *ob.*, t. y ed. ctds., p. 620.

61. Cfr. *Communicationes*, X, 1978, p. 56.

tencia no se ordena primariamente a la sentencia, sino al perdón del culpable»⁶².

Se preveía en el derogado c. 882 un caso de potestad de jurisdicción extendida a todo el Orbe, que tenía cualquier sacerdote aunque no estuviera aprobado para oír confesiones. Se extendía esta potestad a toda clase de pecados —incluidos los reservados— y censuras. Tal extensión de la potestad se producía por causa del peligro de muerte en que el fiel se encontraba. Se decía entonces por la doctrina canónica que existía una potestad delegada *a iure* por el Romano Pontífice, determinada por la ley⁶³. El precepto se conserva sustancialmente en el nuevo canon 976. Poder, o facultad —como ahora procede decir—, que incluso autoriza a una lícita absolución por un sacerdote, carente de facultad, de toda censura y todo pecado, aunque se encuentre allí presente un sacerdote aprobado.

Otro fenómeno análogo encontrábamos en el antiguo c. 883, en este caso dado para los sacerdotes que habían sido antes facultados por un Ordinario determinado, en caso de viaje por mar, que luego se extendió a los áreos. Este precepto no está en el nuevo Código, quizá porque resulte innecesario, y a que, con carácter general, se dice en el c. 967 § 2, que quien tiene facultad de oír confesiones, por razón de oficio o por concesión del Ordinario del lugar de incardinación o de aquel en que tiene su domicilio, puede ejercer tal facultad en cualquier parte.

Pero ¿en qué reside esta facultad? ¿Es distinta a la potestad de jurisdicción antes necesaria? Para Tomás Rincón, en su Comentario a los cc. 965-966, estas diferencias «son sólo de orden terminológico» por lo «que no cambian en la práctica la disciplina antigua y que sólo pretenden perfeccionarla técnicamente»⁶⁴.

Pudiera aparentemente pensarse que el nuevo Código relaciona, de modo tan terminante, potestad de orden y facultad de oír confesiones y absolver, que, si existe esta facultad, es porque se da en el caso concreto la exigencia de idoneidad. Así pudiera deducirse del c. 970 cuando preceptúa que la facultad de oír confesiones sólo debe concederse a los presbíteros que hayan sido considerados aptos mediante un examen, o cuya idoneidad conste de otro modo.

62. Citado por M. SCHMAUS, *ob.*, t. y ed. *ctds.*, p. 544.

63. Cfr. A. ALONSO LOBO, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, II, Madrid 1963, p. 294.

64. T. RINCÓN (*in scriptis*).

Junto a esas exigencias, de preparación intelectual, cabría pensar que pudieran también existir incluso unas exigencias relacionadas con la buena conducta sacerdotal. Estas exigencias hipotéticamente pudiera pensarse que vinieran a ser el otro requisito establecido para otorgar esta facultad. En efecto, el c. 971 prescribe que el Ordinario del lugar no debe conceder a un presbítero la facultad de oír habitualmente confesiones, aunque tenga el domicilio o causidomicilio dentro del ámbito de su jurisdicción, sin haber oído antes —y en la medida que esto sea posible— al Ordinario del Presbítero, es decir, al Ordinario bajo cuya potestad se halle incardinado.

Si a lo anterior unimos, que esa facultad, una vez recibida, se extiende a cualquier parte para su ejercicio, conforme dispone el c. 967 antes citado, podríamos llegar a semejante conclusión con mayor fundamento.

Sin embargo, no es cierto que así sea y hay muchos datos en el nuevo Código para descubrir que, tanto si esta facultad es entendida como poder de ejercicio jurisdiccional como si no, es lo cierto e indudable que depende inconcusamente de la potestad de jurisdicción.

Para confirmar nuestra postura se han de contemplar antes las *vías* que el c. 966 § 2 determina *para recibir esta facultad*: o *ipso iure*; o *por concesión otorgada por la autoridad competente*, a tenor del c. 969.

a) *Datos de los que, en un caso y otro, parece tener la facultad su propia autonomía*

1) *Ipso iure la tienen* (c. 967 § 1) *el Romano Pontífice y los Cardenales*, cuya facultad se extiende por todo el orbe. Pero también gozan la misma facultad *los Obispos*, con lo que parece en principio eliminarse todo sentido de límite o ámbito territorial, en el cual suelen tener los Obispos en ejercicio el poder jurisdiccional; así sucedía con el derogado c. 873 § 1. A esta amplitud que ahora alcanza la facultad influye, a nuestro parecer, esa solicitud para con toda la Iglesia que el Concilio Vaticano II atribuye a los Obispos⁶⁵.

65. En cuanto miembros del Colegio Episcopal y legítimos sucesores de los Apóstoles, «están obligados, por institución y por disposición de Cristo, a una solicitud por la Iglesia universal, que (...) contribuye en alto grado al provecho de la Iglesia Universal (LG, n. 23). CHRD, n. 5, dice: «(...) todos los Obispos en comunión jerárquica participan de la solicitud por la Iglesia entera».

2) Asimismo tienen esta facultad *ipso iure*, por razón de Oficio, pero sólo «dentro del ámbito de su jurisdicción», el Ordinario del lugar, el Canónigo penitenciario y también el párroco y aquellos que ocupen su lugar (c. 968 § 17). En este precepto parece darse una limitación jurisdiccional de índole territorial, pero tal limitación es más aparentemente que real, porque todos los que tienen facultad de oír confesiones, por razón del oficio, pueden ejercer esta facultad en cualquier parte, con lo que se evidencia el alcance universal de la facultad una vez recibida. El Capellán —según el canon 566, § 1— también tiene facultad *vi officii* para escuchar confesiones de aquellos que están confiados a su cuidado. La limitación para absolver censuras que a los Capellanes se otorgan en el § 2.º, referida sólo a los lugares concretos de ejercicio de la capellanía, conduce a entender que la facultad de absolver los pecados no tiene, en cambio, tal limitación.

3) *Facultad de confesar concedida por el Ordinario del lugar*: puede concedérsela a cualquier presbítero (c. 969 § 1), y si bien tiene esta concesión ciertos límites por razón de la jurisdicción a la que está sometido el que recibe la concesión, sin embargo, veamos su alcance: si es sacerdote secular, el Ordinario del lugar no debe concederle esta facultad, cuando este presbítero esté incardinado a otra diócesis, sin haber antes oído el Ordinario propio del presbítero (c. 961); ahora bien, si el sacerdote es religioso, la limitación no se le impone al Ordinario concedente, sino al propio sacerdote, que no debe usar tal facultad recibida sin obtener licencia, al menos presunta, del Superior correspondiente (c. 969 § 1).

De todas maneras, una y otra limitación parecen hallarse más en el campo de la recomendación normativa que en una norma *ius cogens*, cuyo incumplimiento genere al menos algún tipo de responsabilidad.

Pero lo que más interesa destacar es que, una vez que esa facultad ha sido concedida, proceda del Ordinario del lugar de incardinación como del que tiene su domicilio el sacerdote, tal facultad puede ser ejercida en cualquier parte (c. 967 § 2). Por esto puede pensarse que una vez recibida la facultad, ésta se independiza de la potestad que la causó, para operar con un alcance tan extenso, bien distinto del que tiene jurisdiccionalmente el concedente.

b) *Datos manifestativos de la dependencia constante de la facultad a la potestad de jurisdicción en ejercicio*

1) Excluyendo al Romano Pontífice y a los Cardenales, las restantes hipótesis de facultades recibidas *ipso iure*, sea por razón de ser Obispo o por razón de oficio, pueden ser ejercidas también en cualquier parte, pero siempre que el Ordinario de algún lugar no se oponga en un caso concreto (cfr. c. 967 § 2).

2) Igualmente, toda concesión de facultad de oír confesiones otorgada por el Ordinario del lugar competente —sea el del lugar de la incardinación, sea el del domicilio del sacerdote-confesor— podrá ejercerse en cualquier parte, pero siempre a su vez que en un lugar determinado no se oponga el Ordinario de dicho lugar (cfr. c. 967 § 2).

3) Existe una concesión de facultades de oír confesiones por razón de oficio a favor de los Superiores de un Instituto religioso o de una Sociedad de vida apostólica clerical de Derecho pontificio que, según las Constituciones, estén dotados de potestad de régimen; pues bien, esta facultad sólo alcanza a los propios súbditos o a los que moren día y noche en la casa (c. 968 § 2), con lo que pierde, en estas hipótesis, la facultad de oír confesiones su nota de extensión universal.

4) Estos Superiores pueden conceder la facultad de oír confesiones a cualquier presbítero, pero tal facultad queda igualmente limitada a los propios súbditos y a los que moren noche y día en la casa (c. 969 § 2).

5) Tanto esos Superiores, como los que hayan recibido de éstos por concesión la facultad de oír confesiones, tienen efectivamente *ipso iure* esta facultad para ejercerla en cualquier lugar, pero sólo respecto a los miembros de ese Instituto religioso o Sociedad de vida apostólica y a cuantos moren día y noche en una casa de estos Institutos o Sociedad; tal facultad se usará, en cambio, ilícitamente si un Superior Mayor, respecto a sus propios súbditos, se opusiera en un caso concreto (c. 967 § 3).

6) Conviene, además, poner de relieve que el c. 144, último canon del Título dedicado a la Potestad de régimen, establece que también suple la Iglesia en la facultad de oír confesiones cuando hay error común de hecho o de derecho, así como en la duda positiva y probable.

c) *Datos que nos ofrece la revocación de la facultad*

1) No debe revocarse la facultad de oír confesiones habitualmente, si no hay una causa grave que justifique la revocación. El precepto se dirige al Ordinario del lugar y al Superior competente (c. 974 § 1). Este precepto, al objeto que analizamos, nada especial nos ofrece.

2) También queda, en estos casos, *ipso iure* revocada la facultad si se pierde el oficio por la que se tenía, o por excomunión o cambio de domicilio (c. 975). Parece conveniente que, en estos dos últimos casos, haya de entenderse revocada la facultad, según que la concediera el Ordinario de la incardinación del sacerdote o el del lugar de su domicilio, respectivamente. De todas formas, la cuestión de precisar cuándo se da el cambio del domicilio, no dejará de ofrecer problemas (cfr. cc. 102-107).

No se menciona, en cambio —observa Rincón—, la prohibición de origen penal como causa del cese de la facultad. Esto hace sostener a Rincón que el cambio de denominación que introduce el c. 966 tiene mayor alcance jurídico que el meramente terminológico. Según el antiguo c. 2264 los actos de jurisdicción realizados por un excomulgado, por sentencia condenatoria o declaratoria, eran inválidos. La excomunión, según el antiguo c. 873 § 3, privaba de la jurisdicción para confesar. En el nuevo canon 1331, § 1, n.º 2.º a un excomulgado, de todas maneras, se le prohíbe, entre otras cosas, administrar sacramentos. En cambio, el que lleva a cabo un acto de régimen, cuando la excomunión irrogada ha sido declarada, actúa inválidamente en los casos de ilicitud del c. 1331 § 1, n.º 3.º (c. 1331, § 2, n.º 2.º) ⁶⁶. De que esta facultad sacramental no se considere, al ejercitarse, acto de la potestad de régimen o de jurisdicción, hace depender la validez o invalidez de la absolución de que sea efectuada bajo excomunión formalmente declarada.

3) Si el Ordinario del lugar que concedió la facultad es quien la revoca, dado que la facultad (c. 967 § 2) se extendía a cualquier parte, la revocación también tiene la misma extensión (c. 974 § 2). Este Ordinario, que revoca la facultad concedida a un presbítero incardinado a otro Ordinario, debe comunicarle a éste la revoca-

66. Cfr. T. RINCÓN, *ob. (in scriptis) ctd.*

ción; y si se trata de un miembro de Instituto religioso, debe comunicar tal revocación a su Superior competente (c. 974 § 3).

4) Si se trata de facultad concedida al presbítero por Superior Mayor propio, mediante la revocación quedará privado de tal facultad en todas partes (c. 974 § 4).

5) Si al presbítero, que tiene facultad concedida por el Ordinario de la incardinación o por el de su domicilio, se le revoca la facultad por otro Ordinario del lugar, queda revocada sólo en el territorio de la jurisdicción de éste (c. 974 § 2).

6) Si quien revoca la facultad de oír confesiones concedida por un Superior mayor propio es otro Superior competente, la facultad de oír confesiones sólo queda limitada en relación con los súbditos de este Superior y dentro del ámbito de la potestad suya (c. 974 § 4).

d) En conclusión, la facultad de oír confesiones, fuera de los casos del Romano Pontífice y de los Cardenales, depende siempre de la potestad de jurisdicción particular que en cada caso concreto exista.

Extendida la facultad, otorgada en su origen, a todas partes, no en todas puede ser igualmente ejercitada, pues depende de la potestad de jurisdicción particular existente en cada situación concreta. Esta facultad, pues, no deja de quedar condicionada, por tanto, por la potestad de jurisdicción en cada caso. Si por su origen goza *ipso iure*, en la mayor parte de los casos, de un alcance más extenso que el de la potestad de jurisdicción de quien la otorga o la concede, en el desenvolvimiento de su ejercicio la contemplamos siempre pendiente de la potestad jurisdiccional correspondiente, que puede oponerse a este ejercicio.

El Código no la ha querido designar con este apelativo de potestad jurisdiccional⁶⁷, por no corresponder su naturaleza al ámbito

67. La doctrina postcodicial trató detenidamente el tema de la Jurisdicción en la confesión, como lo evidencia, por ejemplo, la obra de E. F. REGATILLO —*Ius Sacramentarium*, Santander 1960, pp. 247-260, y en general, también todos los comentaristas del Código de 1917, en sus diversas obras, que resulta innecesario citar. Al prescindir el nuevo Código, de modo directo, de la potestad jurisdiccional, mencionando sólo el término facultad, se han eliminado muchos problemas, y entre ellos indudablemente el de la distinción, para la Penitencia, entre potestad propia, delegada y las posibilidades de subdelegación.

del Derecho, pero es la potestad de jurisdicción la que la causa, permite su ejercicio y la revoca.

Podría hablarse, en conclusión, de una facultad dependiente de la potestad de jurisdicción realmente existente en cada caso, aunque en su origen, por su naturaleza íntimamente ligada al poder sacerdotal de Cristo, pueda, en muchos casos, gozar *ipso iure*, y de modo eventual, de la dimensión universal de la llamada de Cristo a la santidad de todo el Pueblo de Dios, dado el papel que a este efecto cumple la facultad otorgada. Se trata, pues, de *un poder sacerdotal* propiamente dicho, pero *sometido en su origen y ejercicio a justos límites de naturaleza jurisdiccional*.

Por último, sólo nos queda indicar el modo o *forma de concepción de la facultad*:

1) Debe hacerse habitualmente por escrito (c. 973), lo que no excluye que, en otras ocasiones, baste sólo la forma oral;

2) Puede concederse tanto para un tiempo determinado como indeterminado (c. 972).

V. ABSOLUCIÓN Y SATISFACCIÓN

Por último, nos hallamos ahora en presencia de los dos actos del Sacramento de la Penitencia que ponen término a su celebración. Los unimos bajo un mismo apartado porque ambos corresponden al ministro, que absuelve e impone la satisfacción al penitente, pero mientras la absolución es sólo acto del confesor, la satisfacción compete aceptarla y cumplirla al penitente. En la Confesión individual no se puede absolver si el penitente se negara a satisfacer, con lo que, desde este punto de vista, cronológicamente se anticipa siempre la satisfacción a la absolución; sin embargo, el cumplimiento de la penitencia por el que se confiesa suele consistir en un acto personal del penitente a realizar con posterioridad al momento en que recibe la absolución.

La naturaleza distinta de uno y otro acto, pero, al mismo tiempo, íntima conexión como partes integrales ultimadoras de la Penitencia, justifica que procedamos a estudiar ambos conjuntamente.

El medio ordinario de absolver es el individual. La Confesión individual e íntegra —prescribe el c. 960—, y la absolución constituyen el único modo ordinario con el que un fiel consciente de que está en pecado mortal se reconcilia con Dios y con la Iglesia.

Esta absolución, para *llevarse a cabo válidamente* —conforme dispone el c. 966 § 1— requiere que el ministro, además de la potestad de orden, tenga *facultad de ejercerla sobre los fieles* a quienes les dé la absolución. Nos hallamos, pues, ante un requisito de validez. Ciertamente que el nuevo Código no menciona en este caso que se necesite la potestad de jurisdicción, tan abierta y expresamente reclamada por el c. 872 del antiguo Código, como asimismo se ha de poner de relieve que tampoco en los cánones del nuevo texto legal se califica expresamente a la absolución, como lo hacía el c. 870 del de 1917, de judicial. Sin embargo, el citado c. 966 § 1 requiere que *esta facultad se tenga sobre aquellos concretos fieles* a quienes la absolución se dé. Esta exigencia, y a su vez limitación de la facultad, es consecuencia de lo que hicimos notar antes: que se trata la facultad de absolver de un poder sacerdotal, sometido, sin embargo, por su origen y en su ejercicio, a justos límites de naturaleza jurisdiccional.

Por consiguiente, es una facultad sacerdotal, para cuya efectividad se necesita de un poder jurisdiccional que la otorgue; y si alcanza de ordinario mayor extensión que la que posee el titular del poder que concede la facultad, otras veces, por el contrario, queda reducida al ámbito del poder jurisdiccional mismo del que deriva; es lo que sucede en el caso de facultades no procedentes del oficio eclesiástico y de las concedidas por quienes no son obispos ni de la incardinación ni del domicilio del sacerdote. En todo caso, sin embargo, puede ser impedida por el poder jurisdiccional existente en el lugar por quien tiene en éste la jurisdicción, que la condiciona.

Es una facultad, pues, dependiente de todo momento de la potestad de jurisdicción porque en el ejercicio de esta facultad hay siempre la emisión de un juicio, que si no recae sobre una materia jurídica técnicamente hablando —y de aquí que se haya prescindido de la nota jurisdiccional—, sí tiene elementos análogos en su formulación⁶⁸.

68. Hasta tal punto resulta ser cierto lo que aquí se sostiene, que se advierten en el nuevo Código —por lo que se manifiesta en el c. 1357 y sus remisiones a los cc. 508 y 976, relativos, respectivamente, al Penitenciario y a las hipótesis de peligro de muerte— preceptos que conservan, aunque sea muy limitadamente y en casos muy determinados, ejercicio de potestad jurisdiccional en los confesores. La nueva Ley Canónica en esta materia parece haber seguido, en la medida de lo posible, el criterio que A. MOSTAZA —*Forum internum-Forum externum*, Revista española de Derecho Canónico, XXIV (1968), p. 361— propugnó cuando manifestaba el deseo

En este aspecto, el c. 978 § 1 repite al pie de la letra el antiguo c. 888 § 1: «tenga presente el sacerdote que hace las veces de juez y de médico, y que ha sido constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de misericordia divina, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas».

Como médico de las almas debe curar; como juez y en cuanto constituido por Dios ministro de justicia, debe emitir un juicio e imponer, mediante la satisfacción, una penitencia para corrección del hombre pecador arrepentido, pero también para salvar el honor de Dios. Y de aquí que según el c. 984 debe imponer una satisfacción, por una parte saludable, pero, de otra, conveniente según la gravedad y el número de los pecados, pero siempre teniendo en cuenta la condición del penitente.

La forma del Sacramento consiste precisamente en las palabras de la absolución que pronuncia el ministro según la fórmula aprobada oficialmente por la Iglesia. La absolución se entiende como manifestación de un acto judicial: así se declaró en Trento⁶⁹ y de modo coincidente se expresa el padre Ramírez cuando advierte que «hay un reo que se acusa o confiesa su crimen; un juez que mide y pondera la gravedad, conforme a ella, dicta la sentencia e impone la reparación, que llamamos penitencia». Pero, inmediatamente aclara: «Sin embargo, es preciso no caer en el error de identificar totalmente el juicio penitencial con los juicios humanos, tal como los vemos desarrollarse diariamente. En la penitencia, el penitente es a la vez reo, acusador y testigo, y el sacerdote que la administra es, a un mismo tiempo, juez, médico, doctor y padre, mientras en el juicio criminal humano, se busca el con-

de «que en la nueva codificación se procurase evitar al máximo aquellas normas que pueden dar origen a conflictos entre el estado de la conciencia *coram Deo* y el estado jurídico *coram Ecclesia*». Si hoy, tal como resulta de los cánones dedicados a la penitencia, se contempla la reconciliación con la Iglesia no como un tema jurídico sino moral, de comunión plena con ella, en su paz y por la comunicación de la gracia, sin embargo, se ha de concluir a un mismo tiempo lo siguiente: por razones de gran importancia, y muy limitadamente, se mantiene en el nuevo Código, junto al ejercicio de la facultad de absolver los pecados, facultad esencialmente ligada al Orden Sagrado del Presbiterio, una potestad de absolver determinadas censuras, cuya naturaleza no deja de ser jurídica y requiere de la potestad de jurisdicción para el fuero interno extrasacramental. Es, pues, en estas hipótesis concretas, en las que tiene lugar lo que P. A. BONNET —*Penitenza (Sacramento della)*, *Enciclopedia del Diritto*, XXXII, Milano 1982, cfr. pp. 890-892, ha designado bajo el título *La Penitenza como caso limite della giuridicità*.

69. Denz-Sch, 1709.

veniente castigo del culpable». En cambio, en la Penitencia «lo que directamente se pretende es la absolución o reconciliación del culpable»⁷⁰.

Los textos del Concilio de Trento, enseña Adnés, «sobre todo a la luz de un mejor conocimiento de la historia de los dogmas y de los ritos, no deben, evidentemente, impedir que la teología y la liturgia se abran a ulteriores desarrollos, con miras a responder, dentro de nuevas circunstancias, a nuevos problemas. Pero no por ello dejan de seguir siendo un punto de referencia absolutamente indisponible. Desarrollos que no estuvieran situados dentro de la prolongación homogénea de la doctrina tridentina, no podrían considerarse como frutos auténticos de la fe católica»⁷¹. Por ello, este autor hace notar, cómo en otros tiempos, «se llamaba también juez a quien tenía el cargo de dispensar un beneficio, un favor, una gracia, cuya concesión exige también en el beneficiario determinadas condiciones, que se trata precisamente de verificar o de imponer». Pues bien, «beneficio es la gracia de Dios que perdona los pecados». Cuando Trento califica la absolución de acción judicial, «es evidente que el Concilio no entiende aquí la palabra 'juez' en el sentido que es actualmente el exclusivo entre nosotros», sino que el sacerdote que actúa, en la Penitencia, como juez, administra el sacramento no «de manera arbitraria, sino a quienes cumplen las condiciones requeridas y a los que él estima como tales. He aquí en qué consiste su juicio. En circunstancias normales, necesita conocer los pecados del penitente y su gravedad. Esto le permite formular las exigencias que se imponen absolutamente para que el penitente pueda recibir la gracia de la absolución. Este deberá resarcir el daño hecho al prójimo, reparar el escándalo causado, comprometerse a romper una unión adúltera, evitar las ocasiones próximas de pecado... Este conocimiento de los pecados permite también al sacerdote imponer la satisfacción conveniente y dar al penitente los consejos que debe seguir para perfeccionar su conversión. Si el penitente no quisiera aceptar las condiciones que determine el sacerdote, demostraría que no tiene las disposiciones requeridas para ser absuelto». En cambio, cuando se trata de un moribundo —añade—, «no es cuestión de formular exigencias que éste ni siquiera puede cumplir (...) Al concederle la absolución sin

70. Cfr. S. RAMÍREZ, *ob.*, t. y ed. *ctds.*, p. 18.

71. P. ADNÉS, *ob.* y ed. *ctds.*, p. 193.

conocer sus pecados en detalle, el sacerdote sigue siendo el dispensador prudente del beneficio de la gracia divina. Porque, efectivamente, no procede de manera arbitraria. Estima, en razón de circunstancias excepcionales, que las condiciones son suficientes para la disposición de este beneficio, incluso si no son las que normalmente se exigirían en tiempo ordinario»⁷².

La cita ha sido extensa, pero merecidamente, porque tal proceder es lo que justifica, de análogo modo, la absolución colectiva y general en determinadas hipótesis excepcionales. Pero también esa naturaleza de la absolución, con cierta analogía judicial, explica que el c. 962 § 1 ponga como requisito de validez, para recibir este tipo de absolución, que aquellos fieles que entonces —conforme a la disciplina de la Iglesia— justificadamente no pudieron hacer confesión de sus pecados, tengan el propósito de confesarse de ellos a su debido tiempo. Como antes señalamos, deben hacerlo cuanto antes, en cuanto se presente la ocasión (c. 963), si ninguna causa justa lo impidiere, manteniéndose vigente el precepto de la confesión de los pecados graves dentro del año (c. 969).

De este modo, la Iglesia atiende, con el rigor que la administración del Sacramento merece y la flexibilidad exigida por las especiales circunstancias en que las personas se hallen, las exigencias de este peculiar juicio, en el que si, de una parte, se ha de tener en cuenta que el sacerdote ejerce un ministerio de justicia, de otra se ha de mirar también que ejerce el ministerio de la misericordia de Dios.

Saber unir la justicia y la misericordia es atributo divino, que ha de saber también soldar, en un mismo juicio, el sacerdote a la hora de imponer la penitencia, para que ésta, siendo justa, sea también instrumento de la misericordia divina. «La Iglesia vive una vida auténtica —enseña Juan Pablo II— cuando *profesa y proclama la misericordia* —el atributo más estupendo del Creador y del Redentor—, cuando acerca a los hombres a las fuentes del Salvador de las que es depositaria y dispensadora»⁷³.

El camino que conduce a la Casa del Padre —según el Pontífice— «pasa a través del *examen de conciencia, el arrepentimiento y el propósito de enmienda*, como en la parábola del hijo pródigo, éstas son las etapas, al mismo tiempo lógicas y psicológicas de la

72. *Ibidem*. pp. 232-233.

73. JUAN PABLO II, Encíclica *Dives in misericordia*, 30-XI-1980, n. 13.

conversión. Cuando el hombre supere en sí mismo, en lo íntimo de su humanidad, todas esas etapas, nacerá en él la *necesidad de la confesión* (...), la necesidad vence a la vergüenza: la necesidad de la confesión, de la liberación de los pecados es más fuerte. Nos confesamos a Dios mismo, aunque en el confesonario los escucha el hombre-sacerdote. Este hombre es el humilde y fiel servidor de ese gran misterio que se ha realizado entre el hijo que retorna y el Padre»⁷⁴.

El Código de Derecho Canónico responde con sensibilidad a estas exigencias dada la amplitud con que regula la absolución en peligro de muerte, no ya porque todo sacerdote, aunque carezca de la facultad para confesar, absuelve válidamente (c. 976), sino incluso porque si a un sacerdote excomulgado se le prohíbe celebrar sacramentos (c. 1331), sin embargo esta prohibición queda suspendida en hipótesis de peligro de muerte (c. 1335); también por esa previsión excepcional de situaciones que excusa la confesión individual para autorizar la absolución colectiva.

Esta actitud misericordiosa la advertimos, asimismo, presente en otros cánones. Así sucede con el c. 977, que —contra lo que disponía el c. 884, el cual la consideraba ilícita salvo caso de necesidad—, por excepción, sostiene la validez, y resulta también ser lícita, cuando se trate de la absolución por peligro de muerte del cómplice en pecado grave contra el sexto mandamiento del Decálogo, no incurriéndose por tanto en la excomunión *latae sententiae* reservada a la Sede Apostólica, que prescribe el c. 1378 § 1; mas también la apreciamos cuando se dispone por el c. 980 que la absolución no debe negarse ni retrasarse, si el confesor no duda de la buena disposición del penitente y este pide ser absuelto.

Al contemplar en un texto legal preceptos como los indicados, comprendemos cómo la Iglesia se sirve de la ley, no sólo para imponer deberes de justicia, sino, como en estos casos, facilitar por cauces jurídicos que se haga operativa por el confesor la misericordia de Dios. Y comprendemos entonces cómo este juicio y esta justicia de la Iglesia se hace, en la confesión, ejercicio de la misericordia divina: se realiza así prácticamente lo que de modo clarividente se enseña en Camino: «¡Mira qué entrañas de mise-

74. JUAN PABLO II, *Homilía*, Parroquia de San Ignacio de Antioquía (Roma), 16-III-1980.

ricordia tiene la justicia de Dios! —Porque en los juicios humanos, se castiga al que confiesa su culpa: y, en el divino, se perdona. ¡Bendito sea el santo Sacramento de la Penitencia! »⁷⁵.

Misericordia que se ha de hacer coherente, sin embargo, con la Justicia, como se demuestra con la sola lectura del c. 982: si el penitente presentó denuncia falsa contra un confesor inocente por delito de sollicitación contra el sexto mandamiento, no debe ser absuelto antes de que haya desmentido formalmente la denuncia falsa y esté dispuesto a reparar los daños que quizá se hayan ocasionado.

Un deber, pues, de justicia, que exige previamente devolver la fama del injuriado y estar dispuesto a reparar los daños que se ocasionaron con el agravio. Es lo mismo que sucede con cualquier otro pecado de injusticia, del que resulte la obligación de reparar el daño causado al ofendido.

Si el pecado de falsa delación contra un sacerdote inocente, constituía, según el c. 894 del Código de 1917, el único pecado reservado a la Santa Sede, no por razón de censura, sino del pecado mismo, hoy incurre su autor en el delito, y ha de padecer las penas que define el c. 1387, aunque, a mayor abundamiento, se requiere también —para absolver del pecado— la retractación formal de la falsa denuncia y la disposición a reparar del penitente. Han desaparecido también por consiguiente, del nuevo Código, lo que disponía el c. 904 del derogado: el deber de denuncia por el penitente dentro del plazo de un mes, y la amonestación —bajo pena de pecado mortal— por el Confesor, acerca de esta obligación.

También dispone el c. 978 § 2, que el Confesor, al administrar el sacramento, como ministro que es de la Iglesia, debe atenerse fielmente a la doctrina del Magisterio y a las normas dictadas por la autoridad competente. El Confesor, en el Sacramento, tiene un particular deber de justicia con la Iglesia: ser fiel al Magisterio y observante de las normas dictadas por la autoridad de la Iglesia, a la que se exige una obediencia en materia tan delicada como la de la celebración del Sacramento de la Penitencia. Esto supone que se exija un cuidadoso sometimiento del ministro a lo que la Iglesia dispone respecto al Sacramento, en todo lo que se refiere a su disciplina, fundamentalmente, en vía jurídica y en vía litúrgica. El Confesor es, pues, Juez, Médico y Maestro de la

75. Mons. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, *Camino*, Madrid 1961, n. 309.

fe y de la moral de la Iglesia, y no se utilizan estas palabras aquí como símbolos sino como prototipos de las características de una función compleja en la que realmente se juzga, cura y enseña.

De justicia, por último, es *la satisfacción*. Esta es, como la confesión y la absolución, impuesta y recibida individualmente: según la gravedad y número de los pecados, pero teniendo en cuenta la condición del penitente, dice el c. 981. La penitencia, salvando la infinita distancia que hay entre la justicia de Dios y su misericordia sin límites, ha de ser, hablando en términos humanos, justa, es decir proporcionada. Ya que no es pensable ponderar en este caso la medida de la justicia con criterios de igualdad, sí se han de tener en cuenta el agravio del pecado y las veces en que la ofensa se cometió; mas también el Confesor habrá de apercibirse de la humana debilidad y de todas las circunstancias que en el penitente coinciden, para que la gracia del perdón se opere «teniendo en cuenta la condición de la persona». Ha de ser, pues, según el c. 981, una satisfacción saludable y conveniente, que el penitente personalmente está obligado a cumplir.

La satisfacción, aceptada por el penitente, pertenece a la sustancia de la Penitencia⁷⁶. Tras el arrepentimiento, la confesión, y el propósito de la enmienda, la satisfacción cierra el itinerario propio del regreso del hombre penitente a la Casa del Padre. El dolor del pecado implica expiación: «trátame como a uno de tus jornaleros»⁷⁷, son las palabras del hijo pródigo a su Padre.

La satisfacción significa, por tanto, «una perfección y culminación de lo ocurrido interiormente al arrepentirse y de lo expresado por la palabra al confesar los pecados; es una piedra de toque y el verdadero crisol del arrepentimiento»⁷⁸. El pecado supuso la perturbación, la violación del orden providencial de la creación, y «merece una pena, cuya finalidad es restablecer el orden objetivo de las cosas en su perfecta integridad. La pena sufrida produce la justa reparación del desorden»⁷⁹. «El sacramento de la peni-

76. Enseña A. ALONSO LOBO —*ob.*, t. y ed. *ctds.*, p. 302— que «si la *aceptación* de la penitencia obliga bajo pecado, porque se trata de una parte *esencial* del sacramento, no obstante (...), la violación de ese deber no anularía la absolución recibida ya con provecho. El incumplimiento voluntario de una penitencia grave sería pecado mortal; y el de una penitencia leve supondría pecado venial».

77. Lc 15, 19.

78. M. SCHMAUS, *ob.*, t. y ed. *ctds.*, p. 605.

79. P. ADNÉS, *ob.* y ed. *ctds.*, p. 248.

tencia —añade Adné— devuelve al pecador el don de la vida divina, la gracia habitual (o la aumenta si no la ha perdido porque no ha pecado más que venialmente)»⁸⁰.

Juan Pablo II ha hecho notar «el esfuerzo esencial de la penitencia». A este respecto añade: «En este esfuerzo la voluntad humana de convertirse a Dios es investida por la gracia preveniente de conversión y, al mismo tiempo, de perdón, y liberación espiritual. La penitencia no es sólo un esfuerzo, una carga, sino también una alegría. A veces es una gran alegría del espíritu humano, alegría que otros manantiales no pueden dar»⁸¹.

Alegría —decimos— que procede de la admirable posesión que se goza por el efecto salvador del sacramento de la penitencia. El Derecho Canónico en este caso lo ha sabido expresar con una expresión perfecta:

«En el Sacramento de la penitencia —declara el c. 959—, los fieles (...) obtienen de Dios el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, mediante la absolución dada por el mismo ministro, y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que hicieron al pecar».

En efecto, «el pecado, que lleva indisolublemente una dimensión teológica de separación de Dios y una dimensión eclesiológica de separación, no será jamás perdonado sin que sea abolida esta doble separación». Por la absolución de los pecados, una vez aceptada por el penitente la satisfacción impuesta, se restaura ya el orden vulnerado. Ese doble efecto reparador, para con Dios y con la Iglesia, fue expresado con claridad por la Constitución dogmática *Lumen gentium*, a la vez que ponía de relieve cómo la Iglesia contribuye a la conversión del pecador «con el amor, el ejemplo y las oraciones»⁸².

No ha de extrañar, por consiguiente, que el Pontífice Romano, al convocar a toda la Iglesia a la celebración del Año Jubilar de la Redención, nos ilustre del deseo que le mueve: «la celebración de este acontecimiento quiere ser ante todo una llamada

80. *Ibidem*, p. 193.

81. JUAN PABLO II, *Audiencia General*, 28-II-1979.

82. LG, n. 11. Vid., sobre este tema, A. CATTANEO, *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramento de la Penitencia en la canonística de Klaus Mörsdorf*; así mismo A. MIRALLES, *Dimensión eclesial del Sacramento de la Penitencia*; ambos trabajos se hallan en VV. AA., *Sacramentalidad de la Iglesia y Sacramentos*, Pamplona 1983, pp. 223-231 y 485-501 respectivamente.

al arrepentimiento y a la conversión, como disposiciones necesarias para la participación en la gracia de la redención llevada por El (Jesucristo), y para llegar así a una renovación espiritual en cada uno de los fieles, en las familias, en las *parroquias*, en las diócesis, en las comunidades religiosas y en los otros centros de vida cristiana y de apostolado»⁸³.

La primera de las condiciones principales requeridas, a la que hay que dar una especial importancia, para lucrar la indulgencia plenaria y recibir la comunión dignamente, es «la confesión personal e íntegra, en la que se da el encuentro entre la miseria del hombre y la misericordia de Dios».

El Pontífice ya nos había enseñado en *Dives in misericordia* que «el conocimiento auténtico de Dios, Dios de la misericordia y del amor benigno, es una constante e inagotable fuente de conversión, no solamente como momentáneo acto interior, sino también como disposición estable, como estado de ánimo. Quienes llegan a conocer de este modo a Dios, quienes lo 'ven' así, no pueden vivir sino convirtiéndose sin cesar a El. Viven pues *in statu conversionis*». La Iglesia profesa —añade— esta misericordia de Dios, y, con su testimonio de vida, «cumple la misión del Pueblo de Dios, misión que es participación y, en cierto sentido, continuación de la misión mesiánica de Cristo»⁸⁴.

La Iglesia nos ofrece constantemente este camino permanente de conversión mediante el Sacramento de la Penitencia, y nos brinda, a través de la Confesión de los pecados veniales, que el c. 988 § 2 recomienda, ese vivir convirtiéndonos sin cesar. Así contempló Mons. Escrivá de Balaguer, en su doctrina espiritual, la vida humana, como «un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida (...). Volver hacia la casa del Padre, por medio de ese sacramento del perdón en el que, al confesar nuestros pecados, nos revestimos de Cristo y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios»⁸⁵.

83. JUAN PABLO II, Bula *Aperite Portas*, citada en nota 10; n. 11.

84. JUAN PABLO II, Encíclica *Dives in misericordia*, citada en nota 73; n. 13.

85. Mons. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, *Es Cristo que pasa*, Madrid 1973, n. 64.